

AUMENTA el déficit comercial, la situación de la peseta en los mercados monetarios internacionales sigue deteriorándose —y lo viene haciendo desde el mes de marzo— y los exportadores se quejan de la pérdida de competitividad de sus productos en los mercados internacionales: el esquema, máxime cuando los restantes indicadores de la economía no han variado su tónica desde entonces, es casi idéntico al que se presentaba en el mes de febrero de este año. Y la pregunta que de esta comparación se desprende es evidente: ¿va a haber una nueva devaluación?

Los resultados comerciales del mes de agosto no pueden ser peores: las importaciones, valoradas en 97.390 millones de pesetas, sin llegar a los records establecidos en los meses de mayo y junio, se mantienen a niveles altísimos. Pero hay algo más significativo: han bajado las exportaciones que mantenían una tónica ascendente desde el mes de abril, situándose en 41.625 millones de pesetas, frente a los 52.028 millones logrados en el mes anterior, julio. Como resultado de todo ello, el déficit comercial se eleva a 55.765 millones de pesetas, con una cobertura del 42,74 por 100, es decir, que las exportaciones no llegan ni a la mitad de las importaciones.

El déficit, en lo que va de año, supera los 400.000 millones de pesetas y los expertos opinan que las importaciones no bajarán del billón de pesetas en 1976. Este Gobierno, como el anterior, y el anterior ha dicho en repetidas ocasiones que el problema de la balanza de pagos es uno de los más acuciantes con los que se enfrenta la economía española: mediante el endeudamiento exterior, a través de préstamos y créditos del extranjero, ha tratado de hacer frente al creciente volumen de pagos que las importaciones provocan. Y como consecuencia de ello, el endeudamiento, las deudas de España frente al exterior alcanzan niveles record entre los de los países occidentales.

Hasta dónde es posible endeudarse es una pregunta que se hacen los economistas y algunos políticos desde ya hace tiempo. Y la incógnita se mantiene y aumenta ante la incapacidad de los gobernantes de hacer algo más que pedir dinero a los países que están dispuestos a prestarlo, hipotecando nuestro futuro político y económico. Porque frente al déficit exterior, las medidas adoptadas, la mayor parte de ellas de escasa significación práctica, y las declaraciones de buena voluntad se han estrellado irremisiblemente.

La clave del Gobierno en este terreno, como lo fue para Villar Mir y para Cabello de Alba, es exportar. Los apoyos fiscales, crediticios, los cambios en la legislación del comercio exterior han abundado en los dos últimos años, llegando casi al tope de sus posibilidades; tope marcado, tanto por el hecho de que ya no existen demasiados recursos técnicos que no hayan sido utilizados, como porque la tolerancia de las normas internacionales en materia de comercio exterior tienen un límite —y en lo relativo a sus importaciones los países que compran productos españoles son especialmente estrictos— más allá del cual las contrapartidas suelen ser altamente peligrosas.

La exportación, es cierto, ha crecido



Una devaluación con las tensiones inflacionistas actuales sólo vale para dar un respiro pasajero a determinados sectores privilegiados.

Devaluación de la peseta... contra los trabajadores

en los últimos tiempos como consecuencia de estas medidas. Pero este crecimiento, que ha llevado los resultados a niveles notablemente superiores a los que existían hace uno o dos años, ha llegado al máximo posible. Circunstancias nacionales (la carencia de una industria exportadora que pueda atender a nuevos saltos, significativos en este terreno, la elevación de los precios de venta de los productos españoles en el exterior como consecuencia de la inflación interior, etcétera), así como internacionales (el contenimiento de la demanda de los países occidentales debido al hecho de que todavía no se ha salido plenamente de la crisis de los últimos años, los programas de austeridad, los planes de estabilización que empiezan a promulgarse —y el de Francia no será el último—) impiden un crecimiento que pueda variar a corto plazo la estructura, terriblemente deficitaria, de nuestro comercio exterior; el descenso de las exportaciones en el mes de agosto es, por lo menos, un síntoma claro de que los crecimientos espectaculares —si es que alguna vez los hubo— se han acabado.

Es un análisis ya tradicional: sin profundas modificaciones de la estructura industrial española, sin integraciones más plenas y consolidadas en los mercados internacionales, España no podrá convertirse en un país exportador. Y el hecho de que no lo sea es palpable a la luz del dato según el cual exportamos menos de la mitad de lo que importamos.

Ello no impide la existencia de sectores y de empresas netamente exportadoras o para las cuales la exportación es un capítulo importante de su actividad, y de la capacidad de presión de estas empresas nos habla el hecho de que consiguieron de Villar Mir una devaluación contraria a los intereses económicos de la nación y que únicamente les beneficiaba a ellas. En estos momentos la situación de estas empresas —con los siderúrgicos a la cabeza— se ha agravado: la coyuntura internacional no ha mejorado según lo previsto por ellos y la flexión que se ha producido en los últimos meses ha aumentado sus preocupaciones. Por si fuera poco, la inflación interior, a un ritmo anual del 18 al 20 por 100, se ha

comido las ventajas que produjo la devaluación de febrero, tal y como preveían los críticos de la medida en la ocasión en que fue promulgada.

La reacción de estos sectores ante los hechos señalados es normal dentro de su lógica: piden una nueva devaluación. "La paridad actual (de la peseta) —decía Luis Olarra, un empresario siderúrgico que exporta los dos tercios de su producción, al diario "Informaciones"— no es real y no hay que intentar mantenerla a ultranza". Olarra, junto con numerosos colegas suyos, mantiene la misma postura en la reunión de empresarios exportadores que recientemente se ha celebrado en el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. Parece una copia calcada de las declaraciones que esos mismos exportadores hacían en las semanas previas a la devaluación de febrero. No hay en esta ocasión un ministro de Hacienda como Villar Mir, tan ligado a los intereses siderúrgicos —sector que no ha cumplido ni las más pesimistas previsiones en su marcha en 1976 y que pide ansiosamente medidas para poder exportar—, pero hombres como Pérez de Bricio (de quien se dice que es el auténtico jefe del equipo económico del Gobierno) tienen grandes simpatías dentro del mismo.

Es difícil hacer vaticinios, pero pocos datos señalan que podamos escaparnos de una nueva devaluación, que de hecho existe en los mercados monetarios internacionales, en los que la peseta pierde constantemente posiciones. Y para el supuesto de que se produzca esta probable devaluación sería bueno no olvidar los comentarios que la anterior mereció: una devaluación con las tensiones inflacionistas actuales vale únicamente para dar un respiro pasajero a determinados sectores privilegiados e influyentes de la economía. En lo positivo, claro, porque como contrapartida de ello habrá un aumento, en valor, de las importaciones, por las que habrá de pagarse más, atizando aún más el fuego inflacionista que en estos momentos se conoce.

Ello, mientras no se haga un plan de estabilización destinado a frenar la inflación y a reducir las importaciones, en la más pura lógica económica. Villar Mir no se atrevió a hacerlo, en un momento crucial de la protesta de los trabajadores contra su política económica. Distintas parecen ser las intenciones del actual Gobierno. La congelación salarial es una medida en cartera y que sólo espera los resultados de la encuesta de urgencia que el Instituto de la Opinión Pública está realizando... entre los empresarios. Devaluación y congelación sí que serían dos medidas coherentes entre sí. Serían los pivotes de ese plan de estabilización con el que el Gobierno pretende hacer frente a la crisis imponiendo una larga serie de sacrificios... a los trabajadores, claro está.

Si hubiera devaluación, y es probable que la haya, subirían los precios de los productos importados —el primero sería la gasolina—. Pero para frenar una inflación que disminuye los beneficios de los empresarios exportadores se congelarían los salarios, si es que los empresarios están de acuerdo, y ello lo dirían a través de la encuesta. La maniobra sería redonda y lo será... si los trabajadores lo permiten. ■ CARLOS ELORDI.